

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF, EN EL AMPARO EN REVISIÓN 695/2023, RESUELTO POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA SESIÓN DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO.

En la sesión de tres de abril de dos mil veinticuatro, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de cuatro votos el Amparo en Revisión 695/2023¹, interpuesto por el Gobernador del Estado de Puebla, a través del Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno de esa entidad federativa.

El recurso de revisión se interpuso contra la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro de un juicio de amparo indirecto, en la cual se concedió el amparo al quejoso en contra de los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla en los que se definen las instituciones de matrimonio y concubinato a partir de considerarlas como uniones entre dos personas, lo que el Juzgado de Distrito consideró contrario a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación al excluir las “*preferencias sexuales*” como las relaciones poliamorosas.

¹ Fallado por mayoría de cuatro votos de los Señores Ministros y las Señoras Ministras: Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente). En contra del emitido por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La sentencia mayoritaria resolvió revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado declarando fundado el agravio que hizo valer la autoridad responsable, lo que condujo a analizar nuevamente los conceptos de violación.

La decisión de esta Primera Sala describe el marco conceptual de diversidad sexual, preferencias sexuales, orientación sexual, modelos de relaciones sexo-afectivas, jurisprudencia sobre matrimonio y concubinato, entre otros y desarrolla el estudio de constitucionalidad a partir de los siguientes apartados: i) situaciones a comparar, en el que destaca que las normas generan un tratamiento normativo diferenciado al quejoso, ii) análisis de categoría sospechosa, concluye que las normas no constituyen una diferencia de trato con base en una categoría sospechosa, ya que todo el conjunto de artículos que regulan las instituciones reclamadas respaldan y justifican su exclusión. Además, porque la exclusión que atribuye el quejoso no se puede considerar que atiende a una estigmatización por el tipo de relaciones que realiza, sino que, este límite de dos personas para el matrimonio y concubinato se presenta en función al aspecto operativo.

En la parte medular, se arriba a la conclusión de que el concepto de poliamor tiene una operatividad distinta y más compleja a la del matrimonio, en la medida que implica la gestión de vínculos no monogámicos, donde es necesario ponderar y gestionar las relaciones poliamorosas de manera equitativa y adecuada, dado que en el presente asunto el quejoso, al buscar integrar esta figura jurídica no plantea la necesidad de legislar para reflejar y abordar las complejidades del poliamor, sino que se apliquen los mismos supuestos normativos para el matrimonio y el concubinato por lo que aceptar la

pretensión del quejoso, lejos de generar un beneficio jurídico, afectaría la propia naturaleza del poliamor, dado que su operatividad se vería limitada dentro de los supuestos establecidos en la referida regulación.

Razones de concurrencia. Si bien comparto el sentido de la decisión, respetuosamente, considero que el proyecto debió destacar el contexto fáctico que rodea la instancia constitucional.

Al respecto, en la demanda de amparo el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, tener inclinación y preferencia por mantener relaciones amorosas y afectivas con varias personas de forma simultánea, con el consentimiento de todas las involucradas, lo cual, a su decir, se conoce como “poliamor” o “relaciones poliamorosas”; sin embargo, no indicó si al tiempo de promover el amparo se encontraba en una relación poliafectiva y en su caso de qué tipo, únicamente cuestionó la reacción de los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla.

Esta precisión es relevante, porque se advierte que el mismo quejoso promovió un diverso amparo indirecto en contra de diversos artículos del Código Civil del Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, reclamando las normas que en dicha entidad definen el matrimonio y el concubinato. Lo anterior, parece indicar que la finalidad del quejoso, aunque legítima, no atiende a una situación concreta, real y actual.

A partir de ese contexto fáctico, parece complicado que a través de este juicio de amparo indirecto -que es un medio de control concreto de constitucionalidad- se declare la inconstitucionalidad de los preceptos que regulan el matrimonio y concubinato, dado que se examinarían en

abstracto las normas, lo que hace probable, en caso de concederse el amparo solicitado, que los efectos no puedan materializarse en un acto jurídico específico puesto que el amparo fue promovido de forma individual.

Ahora bien, no comparto las consideraciones contenidas en los párrafos 154 a 158, pues las dificultades -vistas en abstracto- de aplicar a las relaciones poliafectivas las hipótesis de terminación del matrimonio y del concubinato, las relativas a la custodia de hijos e hijas, la división de bienes y filiación no me parecen razones adecuadas para juzgar la constitucionalidad de las normas, pues los problemas que pudieran derivar de la aplicación de esas figuras a ese tipo específico de familias además de no ser aspectos que forman parte de la litis constitucional, estimo deberán resolverse caso a caso cuando se suscite alguna controversia sobre el particular; máxime que las instituciones de matrimonio y concubinato no son las únicas vías para conformar una familia.

En ese sentido, comparto la decisión de negar el amparo, pero atendiendo al contexto fáctico y normativo de la entidad conforme al cual se presentó la demanda de amparo, enfatizando el hecho de que las relaciones poliafectivas no necesariamente guardan relación con la orientación sexual sino con la preferencia relacional, es decir, la elección de un modelo de familia no normados quizá obedece más a un estilo de vida.

ATENTAMENTE

MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF